

JURISPRUDENCIA AMBIENTAL A NIVEL INTERNACIONAL (pp. 2-10)

—

JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A NIVELL INTERNACIONAL (pp. 11-18)

ROSA M. FERNÁNDEZ EGEA

Profesora de Derecho Internacional Público / Professora de Dret Internacional Públic

Universidad Autónoma de Madrid

Sumario: 1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). 2. Corte Internacional de Justicia (CIJ)

En crónicas precedentes ya advertí que, dado que no existe un tribunal o foro internacional que tenga competencia para resolver las controversias de carácter ambiental, la jurisprudencia internacional en esta materia, cuando existe, se encuentra diseminada entre las diversas jurisdicciones.

1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

Como viene siendo habitual, el tribunal internacional que se enfrenta a un mayor número de casos con implicaciones sobre la protección del medio ambiente es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)¹. Y ello a pesar de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) no contempla el derecho de las personas a disfrutar de un medio ambiente saludable y protegido. Sin embargo, la protección del medio ambiente suele aparecer en la jurisprudencia de este tribunal en el marco de dos escenarios. En el primero, cuando la salvaguarda de este bien se predica en consonancia con la protección de algunos derechos fundamentales contenidos en el CEDH que se encuentran estrechamente unidos a los intereses ambientales. En el segundo, cuando los derechos fundamentales previstos en este Convenio pueden verse limitados o restringidos por razones ambientales. Ejemplos de ambos supuestos se encuentran en varias sentencias de reciente aparición en el seno del TEDH.

En lo que concierne al primer escenario, esto es, la protección del medio ambiente a través de la protección de un derecho fundamental del CEDH, tradicionalmente se ha invocado la vulneración del artículo 8 del CEDH, que recoge el respeto a la vida privada y familiar. El TEDH sostiene una interpretación amplia y garantista de este precepto, aceptando su vulneración en casos de contaminación². Así puede constatarse en varios

¹ La jurisprudencia del TEDH puede consultarse en la página web del Tribunal: <http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/>

² También la contaminación acústica ha sido objeto de consideración por parte del TEDH al enfrentarse a supuestos de ruidos de algunos medios de transporte —en su mayoría de aviones—, de maniobras militares, de generación de energía —plantas de energía nuclear, transformadores eléctricos, turbinas de aire—, de obras, de algunas actividades comerciales y profesionales —garajes de coches, fábricas de ropa, garajes metalúrgicos, dentistas o bares—. Precisamente en la crónica publicada en el núm. 2 de la RCDA se comenta el pronunciamiento del TEDH de 20 de mayo de 2010 en el asunto *Oluic contra Croacia*, donde se planteaba un problema de ruidos generados por la actividad hostelera vecina a la vivienda de los reclamantes. En todos ellos el TEDH debía constatar si el nivel de ruido soportado excedía el máximo establecido por las reglas nacionales y los estándares internacionales para poder afirmar la vulneración del artículo 8 del CEDH.

pronunciamientos recientes del TEDH³, destacando el dictado el 2 de diciembre de 2010, asunto *Ivan Atanasov contra Bulgaria*, por recoger en sus párrafos un resumen de la evolución jurisprudencial en este particular.

En dicho pronunciamiento, el TEDH comenzó constatando que, aunque la protección del medio ambiente goza de una consideración creciente en la sociedad actual, esta no encuentra un reflejo explícito en el artículo 8 del CEDH ni en ningún otro precepto del CEDH. Por lo tanto, no cabe acudir al TEDH en cualquier supuesto en que se produzca un deterioro ambiental, ya que no existe un derecho a disfrutar de un medio ambiente saludable. Ello ha motivado que en varias ocasiones se haya urgido al Comité de Ministros para que considere la posibilidad de incorporar al CEDH aspectos relacionados con el medio ambiente para hacer frente a esta necesidad, que hasta la fecha sigue sin resolverse.

No obstante, el TEDH ha admitido en una amplia jurisprudencia que puede invocarse el artículo 8 del CEDH siempre y cuando exista un vínculo directo e inmediato entre la situación impugnada y el hogar o la vida privada o familiar del reclamante. Así se ha procedido en diversos casos en los que existía contaminación, aunque no siempre se ha dado satisfacción a las pretensiones de los demandantes. Son famosos los asuntos *López Ostra contra España* (de 9 de diciembre de 1994), en el que las emisiones de sulfuro de hidrógeno excedían el límite permitido y suponían un peligro para aquellas personas que habitaban cerca de la instalación, y *Guerra y otros contra Italia* (de 19 de febrero de 1998), concerniente a una fábrica de fertilizantes que emitía grandes cantidades de gases inflamables y sustancias tóxicas, poniendo en serio riesgo la salud y la vida de las personas que habitaban en sus proximidades. En ambos casos el TEDH afirmó que existía un vínculo entre la contaminación producida y el disfrute del derecho a la vida privada y familiar⁴. Sin embargo, en el asunto *Kyrtatos contra Grecia*, de 22 de mayo de 2003, el TEDH entendió que la destrucción de un humedal adyacente a la vivienda

³ En el asunto *Mileva y otros contra Bulgaria*, de 25 de mayo de 2010, el TEDH afirmó que el Estado búlgaro había vulnerado el artículo 8 del CEDH por no haber tomado las medidas necesarias para evitar el continuo ruido procedente de pisos vecinos destinados a actividades ajenas a vivienda, tales como oficinas y clubs informáticos.

En el asunto *Dubetska y otros contra Ucrania*, de 10 de febrero de 2011, en cambio, se trataba de la contaminación industrial procedente de varias instalaciones de propiedad estatal (una mina de carbón y una fábrica). El TEDH también afirmó en este caso la vulneración del artículo 8 del CEDH, puesto que las medidas adoptadas por Ucrania no fueron suficientes para proteger a los reclamantes de los riesgos ambientales ocasionados por tales instalaciones.

⁴ Véase también, entre otros, el asunto *Öcan y otros contra Turquía*, de 28 de marzo de 2006, relativo a la degradación ambiental provocada por la actividad de una mina de oro, que afectó igualmente a las personas que residían en su cercanía.

del reclamante no había afectado directamente a los derechos recogidos en el artículo 8 del CEDH, a pesar de los daños producidos a algunas aves y otras especies protegidas. En opinión del TEDH, ha de existir un efecto dañino sobre la esfera privada o familiar de un individuo y no un simple deterioro general del medio ambiente para poder afirmar la vulneración del artículo 8 del CEDH. Además, como sostuvo en el asunto *Fadeyeva y otros contra Rusia*, de 26 de octubre de 2006, se considerará que existe vulneración de dicho precepto cuando los efectos ocasionados por la contaminación de que se trate (en dicho caso procedía de una planta de fundición de metal) sobrepasen un cierto límite mínimo, que se establecerá atendiendo a las circunstancias particulares del caso. Entre otros factores, se tendrán en cuenta la intensidad y duración de la contaminación, si las emisiones contaminantes incumplen la normativa nacional al respecto, la distancia entre la fuente de las emisiones y las viviendas de las personas reclamantes, y la existencia de pruebas médicas sobre el deterioro de la salud o sobre la mortandad de las personas que se hayan visto afectadas por la contaminación. Ninguno de estos elementos será determinante en la afirmación de la vulneración del artículo 8 del CEDH, sino que esta se verificará por el cúmulo de estas circunstancias.

Volviendo al caso que nos concierne, en el asunto *Ivan Atanasov contra Bulgaria* se trataba de una balsa de residuos de una antigua mina de cobre cuyas emisiones tenían un impacto perjudicial para la vida privada del reclamante, así como sobre el disfrute pacífico de sus posesiones. En esta ocasión, el TEDH consideró que la contaminación alegada no era lo suficientemente relevante ni tenía un impacto directo sobre la esfera privada del reclamante como para afirmar la vulneración de los derechos recogidos en el artículo 8 del CEDH. Ello, atendiendo a una serie de circunstancias diversas. En primer lugar, la vivienda del reclamante se encuentra a una distancia considerable de la fuente de las emisiones. En segundo lugar, no existe un riesgo de deterioro repentino del medio ambiente puesto que la contaminación que emanaba de la balsa no era el resultado de un proceso activo de producción que pudiera dar lugar a emisiones imprevistas de gases. En tercer lugar, tampoco existen pruebas médicas que confirmen las consecuencias negativas para la salud de las personas que viven en la ciudad en la que habita el reclamante, ni información estadística alguna que atestigüe que las supuestas emisiones hayan incrementado la ratio de mortalidad en dicha población. En suma, las alegaciones del reclamante sobre los posibles perjuicios a largo plazo y el deterioro general del medio ambiente no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal.

Por lo que concierne al segundo escenario, la restricción del disfrute de un derecho recogido en el CEDH por motivos ambientales, la protección del medio ambiente suele colisionar con el derecho a la propiedad privada recogido en el artículo 1 del Protocolo núm. 1 al CEDH. Respecto a este particular, cabe destacar el pronunciamiento de 18 de noviembre de 2010 en el asunto *Consorts Richet y Le Ber contra Francia*. En dicho caso se trataba de unos particulares (la Sra. Le Ber y el matrimonio Richet) que vendieron al Estado francés parte de unos terrenos que tenían en propiedad en la isla de Porquerolles. En el acuerdo de compraventa se especificaba que, a cambio de ceder los terrenos al Estado, sus propietarios podrían llevar a cabo una serie de construcciones en los terrenos que quedaban en su poder. Sin embargo, años después y tras la elaboración del Plan de Ocupación del Suelo o POS, los terrenos afectados se declararon “no edificables” atendiendo a su valor ambiental. Esta calificación impidió que los particulares afectados pudieran construir las instalaciones, los edificios y las ampliaciones de otros ya existentes —hoteles— que estaban previstos en el contrato de compraventa.

A la vista de estas circunstancias, los perjudicados reclamaron ante la jurisdicción nacional la anulación de la venta o, en su defecto, la obtención de una suma de dinero en concepto de indemnización por los perjuicios ocasionados por el hecho de que el Estado francés no se hubiera atendido a sus compromisos. Ninguna de las pretensiones fue atendida, motivo por el cual los particulares, una vez agotada la vía interna, acudieron al TEDH.

En su demanda, los particulares alegaron que el derecho de construir sobre su propiedad fue la condición por la cual aceptaron vender gran parte de sus terrenos al Estado a un valor muy inferior al de mercado. De esta forma, invocaron la vulneración del artículo 1 de Protocolo núm. 1, que establece que:

“Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del Derecho Internacional.

Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que poseen los Estados de dictar las leyes que estimen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos, de otras contribuciones o de las multas.”

El Gobierno francés, en cambio, sostenía que los reclamantes no eran titulares de un bien en el sentido del artículo citado, sino que el contrato de venta les confería una mera facultad para construir, no asimilable a un derecho, y, como tal, subordinada a las reglas vigentes de urbanismo y de protección del medio ambiente.

El Tribunal recordó qué ha de entenderse por *bienes* en el sentido del artículo 1 del Protocolo núm. 1 al CEDH, que también comprende el disfrute efectivo de un bien en propiedad. Así, constató que los demandantes habían consentido la venta de una gran parte de sus territorios en la isla de Porquerolles por llevar aparejada un derecho de construir en sus parcelas, estableciéndose incluso una lista explícita de los edificios cuya construcción se preveía. De esta forma, sí cabe afirmar la titularidad de un derecho a construir y la consiguiente esperanza legítima de poder ejercer tal derecho en las condiciones establecidas en el contrato de compraventa, siendo por lo tanto, titulares de un bien en el sentido del artículo 1 del Protocolo núm. 1 al CEDH.

Igualmente, el TEDH recordó que el artículo 1 del Protocolo núm. 1 al CEDH también prevé la posibilidad de que el derecho de propiedad privada pueda ser sometido a ciertas condiciones y de que su uso sea regulado cuando esté en juego un bien de interés general. En este sentido, el Gobierno francés sostuvo que sus actuaciones se habían guiado en todo momento con el único objetivo de proteger el medio ambiente. Los denunciantes, por su parte, no se oponían a considerar el medio ambiente como un bien de interés general, pero reclamaban que se les concediera una satisfacción justa por no poder ejercer sus derechos.

En este sentido, el TEDH afirmó que el derecho de propiedad garantizado por el precepto citado no se encuentra vulnerado si existe un justo equilibrio entre los imperativos del interés general y la salvaguarda del derecho fundamental del individuo. Dicho equilibrio se rompe, no obstante, si la persona afectada ha tenido que soportar una carga especial y exorbitante. Tal parecía ser el caso en el presente asunto, agravado por el hecho de que las autoridades francesas no habían intentado encontrar una solución de compromiso que permitiera conciliar los derechos de construcción conferidos a los reclamantes y la protección del hábitat de la isla de Porquerolles. Una conciliación conllevaría, por ejemplo, una posible compensación material o financiera por los perjuicios sufridos por el hecho de que el Estado no hubiera respetado las condiciones recogidas en el acto de compraventa de los terrenos. Por consiguiente, el Tribunal afirmó que, dado que las autoridades francesas habían privado a los

demandantes de la posibilidad de disfrutar de sus derechos sin concederles indemnización alguna, la carga soportada por los demandantes era especial y exorbitante, de forma que se rompía el justo equilibrio entre la protección de su propiedad y la exigencia de un interés general.

2. Corte Internacional de Justicia (CIJ)

Aunque la CIJ es el único tribunal internacional que cuenta con competencia para resolver cualquier controversia en materia de derecho internacional ambiental en virtud de su jurisdicción universal, han sido pocos los pronunciamientos de la Corte en este ámbito⁵. No obstante, actualmente son tres los casos pendientes ante la Corte con implicaciones ambientales. Junto con el asunto de las fumigaciones aéreas con pesticidas tóxicos sobre territorio ecuatoriano (Ecuador contra Colombia), demanda interpuesta en abril de 2008, y el asunto sobre la caza ilegal de ballenas por parte de Japón, demanda interpuesta por Australia el 31 de mayo de 2010⁶, ha llegado a la Corte un tercer caso: el asunto sobre ciertas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en el área fronteriza con Costa Rica.

El 18 de noviembre de 2010, Costa Rica interpuso una demanda frente a Nicaragua al considerar que, mediante el envío y establecimiento de fuerzas armadas nicaragüenses en el territorio costarricense, Nicaragua había vulnerado principios fundamentales de derecho internacional, tales como la integridad territorial o la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. También alegaba la vulneración de obligaciones convencionales que este país tiene respecto de Costa Rica, entre las que se encuentran las recogidas en la Convención de Ramsar sobre los Humedales de importancia internacional⁷. En su demanda, Costa Rica solicitó que la Corte adoptara una serie de medidas provisionales, y la resolución de esta solicitud es el

⁵ Hasta la fecha, contamos con los pronunciamientos de la CIJ en el asunto *Proyecto Gabčíkovo-Nagymaros (Hungría c. Eslovaquia)*, de 25 de septiembre de 1997; en la opinión consultiva de la CIJ en relación con la *Legalidad de la amenaza o uso de las armas nucleares*, de 8 de julio de 1996, y en el asunto sobre las *Fábricas de papel en el río Uruguay* (Argentina c. Uruguay), de 20 de abril de 2010.

⁶ Véanse los comentarios a estos dos asuntos en la crónica publicada en el número 2 de la RCDA.

⁷ La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, firmado en Ramsar (Irán) el 2 de febrero de 1971 y que entró en vigor el 21 de diciembre de 1975, constituye un marco para la coordinación de actuaciones nacionales e internacionales en la conservación y el uso inteligente de los humedales y sus recursos, en especial como hábitat acuático. Véase más información sobre este convenio en su página web: <http://www.ramsar.org>.

pronunciamiento que emitió la Corte el 8 de marzo de 2011, si bien todavía queda pendiente la resolución sobre el fondo del asunto.

El conflicto, que es básicamente territorial, surgió porque Nicaragua había realizado labores de drenaje del río San Juan y había construido un canal artificial sobre territorio que Costa Rica considera bajo su soberanía. Tales actividades no solo se habían realizado sin el consentimiento de Costa Rica, sino que también habían conllevado la presencia en dichos terrenos de fuerzas militares nicaragüenses, lo que Costa Rica consideraba como un atentado a su soberanía. Este país, además, denuncia otros hechos, tales como la deforestación ilegal de áreas de bosques ancestrales protegidos internacionalmente, la causación de daños graves e irreversibles al ecosistema, el depósito de sedimentos sobre territorio costarricense y el cambio del curso del río Colorado, con la consiguiente modificación del límite fronterizo entre ambos países. De esta forma, en su solicitud de medidas provisionales, y en lo que aquí interesa, Costa Rica pidió que la Corte declarara, en primer lugar, el cese inmediato de la tala de árboles y de la retirada de vegetación y tierra en los humedales y bosques que se encuentran bajo su soberanía, y, en segundo lugar, el cese inmediato del vertido de sedimentos en territorio costarricense. Además, solicitó que Nicaragua se abstuviera de realizar cualquier otra actuación que pudiera perjudicar los derechos de Costa Rica o que pudiera agravar o extender la controversia territorial aún pendiente ante la Corte.

Nicaragua, por su parte, arguyó que las actividades de construcción y drenaje se habían llevado a cabo exclusivamente en territorio nicaragüense y que en ningún momento se habían producido daños irreparables para Costa Rica. En cuanto al canal, Nicaragua señaló que se trataba de un canal natural que con los años se había obstruido y que sus actuaciones se habían limitado a hacerlo nuevamente navegable para pequeñas embarcaciones, descartando que se tratara de la construcción de un canal artificial, tal y como había denunciado Costa Rica. En lo que se refiere a la tala de árboles, Nicaragua sostuvo que esta había sido limitada y que se preveía la replantación en las áreas afectadas situadas en el banco izquierdo del canal. Por último, este país afirmó que las tropas nicaragüenses se habían desplazado allí con el único propósito de proteger a los trabajadores encargados de limpiar el canal y que en ningún momento habían abandonado el territorio nicaragüense.

La Corte, al examinar el primero de los requisitos para el otorgamiento de medidas provisionales (el carácter plausible de los derechos cuya protección se pretende —o

fumus boni iuris— y su vinculación a las medidas solicitadas), recordó que las pretensiones de Costa Rica en el litigio principal eran afirmar, por un lado, el título de soberanía sobre la isla Portillos y el río Colorado, y, por el otro, su derecho a proteger el medio ambiente en dichas áreas. Según la Corte, si bien advirtiendo que con ello no se prejuzga el resultado del litigio principal, los derechos alegados por Costa Rica sí son plausibles en el presente caso. Además, la Corte afirmó que existe un vínculo entre dichos derechos y las medidas provisionales que se solicitan, puesto que tales derechos pueden verse afectados si Nicaragua continúa con sus actividades de drenaje en el río San Juan, al suponer una amenaza para la navegación sobre el río Colorado y no poder descartarse que causen daños al territorio costarricense.

Por lo que se refiere a los otros dos requisitos para el otorgamiento de las medidas provisionales (el perjuicio irreparable y la urgencia), la Corte recordó que en el marco del litigio principal Costa Rica reclama que se restaure el statu quo anterior a las actividades llevadas a cabo por Nicaragua. La urgencia de la adopción de las medidas provisionales solicitadas se explica, así pues, por el hecho de que, a través de sus actuaciones, Nicaragua estaba alterando la situación fáctica antes de que se pronunciara la Corte sobre el fondo del asunto. Sin embargo, Nicaragua argumentó que ya no existía tal riesgo, en particular el de carácter ambiental, pues las operaciones de limpieza del cauce del canal ya habían finalizado y las fuerzas armadas nicaragüenses ya no se encontraban en la zona. Además, Nicaragua señaló que el proceso de reforestación de dicha área ya había dado comienzo.

Así pues, la Corte concluyó que Nicaragua debía abstenerse de realizar una serie de actuaciones en toda la zona litigiosa, a saber, abstenerse de enviar o estacionar tropas u otro personal, proseguir con la construcción o alargamiento del canal, talar árboles o retirar vegetación o tierra, o depositar sedimentos. Sin embargo, a la vista de lo alegado por Nicaragua sobre la finalización de algunas de las actividades denunciadas, solo era preciso dictar medidas provisionales en relación con el envío y establecimiento de tropas o de otro tipo de personal nicaragüense.

En relación con el drenaje del río San Juan, la Corte consideró que las pruebas alegadas por las partes no permitían afirmar la existencia de un riesgo irreparable para el medio ambiente costarricense o para la corriente del río Colorado, ni existía un riesgo inminente de que se prejuzguen los derechos que Costa Rica demanda en el litigio principal.

No obstante, en este pronunciamiento la Corte ha mostrado su sensibilidad ambiental al señalar que, en la zona objeto de disputa, tanto Nicaragua como Costa Rica habían designado dos humedales de importancia internacional en virtud del Convenio de Ramsar: el “Humedal Caribe Noreste” y el “Refugio de vida silvestre Río San Juan”. Así, considera que, mientras esté pendiente la resolución sobre el fondo del asunto, Costa Rica está en su derecho de poder evitar que se ocasione un perjuicio irreparable sobre tal zona, lo que implicaría el envío de personal civil que vele por la protección del medio ambiente en dicho territorio, incluido el canal. Costa Rica tiene, en este sentido, la obligación de consultar a la Secretaría de la Convención de Ramsar sobre tales actuaciones, así como de notificarlas previamente a Nicaragua y de esforzarse con este país por encontrar una solución conjunta a los problemas.

Sumari: 1. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). 2. El Tribunal Internacional de Justícia (TIJ).

En cròniques precedents he advertit que, atès que no hi ha cap tribunal o fòrum internacional que tingui competència per resoldre controvèrsies de caràcter ambiental, la jurisprudència internacional en aquesta matèria, si n'hi ha, es troba disseminada entre diverses jurisdiccions.

1. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH)

Com és habitual, el tribunal internacional que s'enfronta a més casos amb implicacions sobre la protecció del medi ambient és el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH)¹. I això malgrat que la Convenció europea de drets humans (CEDH) no preveu cap dret específic sobre el dret de les persones a gaudir d'un medi ambient saludable i protegit. No obstant això, la protecció del medi ambient sol aparèixer en la jurisprudència d'aquest tribunal en el marc de dos escenaris. En el primer, quan la salvaguarda d'aquest bé es predica al fil de la protecció d'alguns drets fonamentals que conté la CEDH que es troben estretament units als interessos ambientals. En el segon, quan els drets fonamentals previstos en aquesta Convenció poden veure's limitats o restringits per raons ambientals. Trobem supòsits d'ambdós exemples en unes quantes sentències que acaben d'aparèixer en el si del TEDH.

Pel que fa al primer escenari, és a dir, la protecció del medi ambient a través de la protecció d'un dret fonamental de la CEDH, tradicionalment s'ha invocat la vulneració de l'article 8 CEDH, que recull el respecte a la vida privada i familiar. El TEDH sosté una interpretació àmplia i garant d'aquest precepte, i n'accepta la vulneració en casos de contaminació². Així es pot constatar en diversos pronunciaments recents del TEDH³,

¹ La jurisprudència del TEDH es pot consultar al web del Tribunal: <<http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/>>.

² La contaminació acústica també ha estat objecte de consideració per part del TEDH, ja que s'ha enfrontat a supòsits de sorolls d'alguns mitjans de transport —majoritàriament d'avions—, de maniobres militars, de generació d'energia —plantes d'energia nuclear, transformadors elèctrics, turbines d'aire—, d'obres, d'algunes activitats comercials i professionals —garatges de cotxes, fàbriques de roba, garatges metal·lúrgics, dentistes o bars. Precisament en la crònica publicada en el núm. 2 de la *RCDA*, comentem el pronunciament del TEDH de 20 de maig de 2010 de l'afer *Oluic c. Croàcia*, en què es plantejava un problema de soroll generat per l'activitat hostalera veïna a l'habitatge dels reclamants. El TEDH havia de constatar si el nivell de soroll suportat excedia el punt màxim establert per les regles nacionals i els estàndards internacionals per poder afirmar que s'havia vulnerat l'article 8 CEDH.

³ En l'afer *Mileva i altres c. Bulgària*, de 25 de maig de 2010, el TEDH va afirmar que l'Estat búlgar havia vulnerat l'article 8 CEDH per no haver pres les mesures necessàries per evitar el soroll continu procedent de pisos veïns destinats a activitats alienes a viure-hi, com ara oficines i clubs informàtics. En l'afer *Dubetska i altres c. Ucraïna*, de 10 de febrer de 2011, en canvi, es tractava de la contaminació

entre els quals destaquem el que es va dictar el 2 de desembre de 2010, l'afer *Ivan Atanasov c. Bulgària*, perquè recollia en els paràgrafs el resum de l'evolució jurisprudencial en aquest particular.

En aquest pronunciament, el TEDH va començar constatant que, tot i que la protecció del medi ambient té una consideració creixent en la societat actual, aquesta societat no troba un reflex explícit en l'article 8 CEDH ni en cap altre precepte de la CEDH. Per tant, no es pot acudir al TEDH en qualsevol cas de deteriorament ambiental, ja que no existeix cap dret a gaudir d'un medi ambient saludable. Aquest fet ha motivat que en diverses ocasions s'hagi instat el Comitè de Ministres perquè considerés la possibilitat que la CEDH es veiés complementada per fer front a aquesta necessitat, que fins ara continua sense resoldre's.

No obstant això, el TEDH ha admès en una jurisprudència àmplia que pugui invocar l'article 8 CEDH sempre que hi hagi un vincle directe i immediat entre la situació impugnada i la llar o la vida privada o familiar de la part reclamant. D'aquesta manera s'ha procedit en diversos casos en què hi havia contaminació, tot i que no sempre s'han satisfet les pretensions dels demandants. Són coneguts els afers *López Ostra c. Espanya* (de 9 de desembre de 1994), en què les emissions de sulfur d'hidrogen excedien el límit permès i suposaven un perill per a les persones que vivien prop de la instal·lació, i *Guerra i altres c. Itàlia* (de 19 de febrer de 1998), referent a una fàbrica de fertilitzants que emetia grans quantitats de gasos inflamables i substàncies tòxiques, que posaven en perill la salut i la vida de les persones que vivien a prop. En ambdós casos el TEDH va afirmar que entre la contaminació que s'havia produït i el gaudi del dret a la vida privada i familiar hi havia un vincle⁴. No obstant això, en el cas *Kyrtatos c. Grècia*, de 22 de maig de 2003, el TEDH va entendre que la destrucció d'una zona humida adjacent a l'habitatge de la part reclamant no havia afectat directament els drets recollits en l'article 8 CEDH, tot i els danys produïts a algunes aus i a altres espècies protegides. Segons el TEDH, per poder afirmar que s'ha vulnerat l'article 8 TEDH, hi ha d'haver un efecte nociu sobre l'esfera privada o familiar d'un individu i no un simple

industrial procedent de diverses instal·lacions de propietat estatal (una mina de carbó i una fàbrica). En aquest cas, el TEDH també va afirmar la vulneració de l'article 8 CEDH, ja que les mesures adoptades per Ucraïna no van ser suficients per protegir els reclamants dels riscos ambientals ocasionats per aquestes instal·lacions.

⁴ Vegeu també, entre altres, l'afer *Öcan i altres c. Turquia*, de 28 de març de 2006, relatiu a la degradació ambiental provocada per l'activitat d'una mina d'or, que va afectar de la mateixa manera les persones que hi residien a prop.

deteriorament general del medi ambient. A més, com va defensar en l'afer *Fadeyeva i altres c. Rússia*, de 26 d'octubre de 2006, es considera que es vulnera aquest precepte quan els efectes ocasionats per la contaminació corresponent (en aquest cas procedia d'una planta de fosa de metall) sobrepassin un cert límit mínim, que s'estableix atenent les circumstàncies particulars del cas. Entre altres factors, s'han de tenir en compte la intensitat i la durada de la contaminació, si les emissions contaminants incompleixen la normativa nacional en aquest sentit, la distància entre la font de les emissions i els habitatges de les persones reclamants, així com l'existència de proves mèdiques sobre el deteriorament de la salut o mortaldat de les persones que s'hagin vist afectades per la contaminació. Cap d'aquests elements és determinant en l'afirmació de la vulneració de l'article 8 CEDH, sinó que el cúmul de circumstàncies l'ha de verificar.

Tornant al cas que ens concerneix, en l'afer *Ivan Atanasov c. Bulgària* es tractava d'una bassa de residus d'una antiga mina de coure les emissions de la qual tenien impacte perjudicial per a la vida privada de la part reclamant, i també sobre el gaudi pacífic de les seves propietats. En aquesta ocasió, el TEDH va considerar que la contaminació que s'havia al·legat no era prou rellevant ni tenia impacte directe sobre l'esfera privada de la part reclamant per afirmar que s'havien vulnerat els drets que recull l'article 8 CEDH. Això, atenent una sèrie de circumstàncies diverses. En primer lloc, l'habitatge de la part reclamant es troba a una distància considerable de la font d'emissions. En segon lloc, no existeix cap risc de deteriorament sobtat del medi ambient, ja que la contaminació que emanava de la bassa no resultava d'un procés actiu de producció que pogués donar lloc a emissions imprevistes de gasos. En tercer lloc, tampoc hi ha proves mèdiques que confirmin les conseqüències negatives per a la salut de les persones que viuen a la ciutat on viu la part reclamant, ni cap informació estadística que testifiqui que les suposades emissions hagin incrementat la ràtio de mortalitat en aquesta població. En resum, el Tribunal no va tenir en compte les al·legacions de la part reclamant sobre els possibles perjudicis a llarg termini i el deteriorament general del medi ambient.

Pel que fa al segon escenari, la restricció del gaudi d'un dret recollit en la CEDH per motius ambientals, la protecció del medi ambient sol topar amb el dret a la propietat privada que recull l'article 1 del Protocol núm. 1 a la CEDH. A aquest particular, cal destacar el Pronunciament de 18 de novembre de 2010 en l'afer *Consorts Richet i Le Ber c. França*. En aquest cas es tractava d'uns particulars (la Sra. Le Ber i el matrimoni

Richet) que van vendre a l'Estat francès part d'uns terrenys que tenien en propietat a l'illa de Porquerolles. En l'acord de compravenda s'especificava que a canvi de cedir els terrenys a l'Estat, els propietaris podrien construir en els terrenys que quedaven en el seu poder. No obstant això, anys més tard i després d'haver elaborat el Pla d'Ocupació del Sòl o POS, els terrenys afectats es van declarar no edificables, atenent el seu valor ambiental. Aquesta qualificació va impedir que els particulars afectats poguessin construir instal·lacions, edificis i ampliacions d'altres ja existents —hotels—, que estaven previstes en el contracte de compravenda.

A la vista d'aquestes circumstàncies, els perjudicats van reclamar davant la jurisdicció nacional l'anul·lació de la venda i, si no fos possible, l'obtenció d'una suma de diners en concepte d'indemnització pels perjudicis ocasionats pel fet que l'Estat francès no es va atendre al compromís. No es van atendre cap de les pretensions, motiu pel qual els particulars, un cop esgotada la via interna, van acudir al TEDH.

En la demanda, els particulars van al·legar que el dret de construir sobre la seva propietat va ser la condició per la qual van acceptar vendre gran part dels terrenys a l'Estat a un valor molt inferior al de mercat. D'aquesta manera, van invocar la vulneració de l'article 1 del Protocol núm. 1, que estableix que:

“Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del Derecho Internacional.

Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que poseen los Estados de dictar las leyes que estimen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos, de otras contribuciones o de las multas.”

El Govern francès, en canvi, mantenia que els reclamants no eren titulars de cap bé en el sentit de l'article esmentat, sinó que el contracte de venda els conferia la mera facultat per construir, no assimilable al dret, i com a tal, subordinada a les regles vigents d'urbanisme i de protecció del medi ambient.

El Tribunal va recordar el que ha d'entendre's per “béns” en el sentit de l'article 1 del Protocol núm. 1 al CEDH, que també comprèn el gaudi efectiu d'un bé en propietat. D'aquesta manera, va constatar que els demandants havien consentit la venda d'una gran part dels seus territoris a l'illa de Porquerolles perquè estava aparellada al dret de construir en les seves parcel·les, fins i tot s'establia una llista explícita dels edificis que

es preveien construir. D'aquesta manera, sí que es pot afirmar la titularitat del dret a construir i la conseqüent esperança legítima de poder exercir-lo en les condicions establertes en el contracte de compravenda, per tant, com a titulars d'un bé en el sentit de l'article 1 del Protocol núm. 1 al CEDH.

Igualment, el TEDH va recordar que l'article 1 del Protocol núm. 1 al CEDH també preveu la possibilitat que el dret de propietat privada es pugui sotmetre a certes condicions així com de regular-ne l'ús quan estigui en joc un bé d'interès general. En aquest sentit, el Govern francès va sostenir que les seves actuacions es van guiar en tot moment amb l'únic objectiu de protegir el medi ambient. Els denunciants, per la seva banda, no s'oposaven a considerar el medi ambient com un bé d'interès general, però reclamaven que se'ls concedís una satisfacció equitativa per no haver pogut exercir els seus drets.

En aquest sentit, el TEDH va afirmar que el dret de propietat garantit pel precepte esmentat no es vulnera si hi ha un equilibri just entre els imperatius de l'interès general i la salvaguarda del dret fonamental de l'individu. Aquest equilibri es trenca, però, si la persona afectada ha hagut de suportar una càrrega especial i exorbitant. Aquest és el cas en aquest assumpte, agreujat pel fet que les autoritats franceses no van intentar trobar una solució de compromís que permetés conciliar els drets de construcció conferits als reclamants i la protecció de l'hàbitat de l'illa de Porquerolles. La conciliació comportaria, per exemple, una possible compensació material o financera pels perjudicis soferts, pel fet que l'Estat no havia respectat les condicions que recollia l'acte de compravenda dels terrenys. Per tant, el Tribunal va afirmar que, atès que les autoritats franceses havien privat els demandants de la possibilitat de gaudir els seus drets, sense concedir-los cap indemnització, la càrrega suportada pels demandants era especial i exorbitant, i que s'havia trencat l'equilibri just entre la protecció de la seva propietat i l'exigència d'un interès general.

2. El Tribunal Internacional de Justícia (TIJ)

Tot i que el TIJ és l'únic tribunal internacional que té competència per resoldre qualsevol controvèrsia en matèria de dret internacional ambiental en virtut de la seva

jurisdicció universal, els pronunciaments del Tribunal en aquest àmbit han estat pocs⁵. No obstant això, actualment els casos pendents davant el Tribunal amb implicacions ambientals són tres. Juntament amb el cas de les fumigacions aèries de pesticides tòxics sobre el territori equatorià (*Ecuador c. Colòmbia*), demanda interposada a l'abril de 2008, i l'afer sobre la caça il·legal de balenes per part del Japó, demanda interposada per Austràlia el 31 de maig de 2010⁶, ha arribat al Tribunal el tercer cas: l'afer sobre certes activitats dutes a terme per Nicaragua en l'àrea fronterera de Costa Rica.

El 18 de novembre de 2010, Costa Rica va interposar una demanda contra Nicaragua perquè considerava que mitjançant l'enviament i l'establiment de les forces armades nicaragüenques en territori costa-riqueny, Nicaragua havia vulnerat uns quants principis fonamentals de dret internacional, com ara la integritat territorial o la prohibició de l'ús de la força en relacions internacionals. També al·legava la vulneració d'obligacions convencionals que aquest país té respecte de Costa Rica, entre les quals hi ha les que recull el Tractat Ramsar sobre zones humides⁷. En la demanda, Costa Rica va demanar que el Tribunal adoptés una sèrie de mesures provisionals, i la resolució d'aquesta sol·licitud és el pronunciament que va emetre el 8 de març de 2011, tot i que la solució sobre el fons encara està pendent.

El conflicte, que és bàsicament territorial, va sorgir perquè Nicaragua havia estat realitzant tasques de drenatge del riu San Juan i havia estat construint un canal artificial sobre un territori que Costa Rica considera sota la seva sobirania. Aquestes activitats no només es realitzaven sense el consentiment de Costa Rica, sinó que també van motivar la presència de les forces militars nicaragüenques en aquests terrenys, cosa que Costa Rica considerava un atemptat contra la seva sobirania. Aquest país, a més, denuncia altres fets, com ara la desforestació il·legal d'àrees de boscos ancestrals i protegits internacionalment, la causació de greus danys a l'ecosistema de manera irreversible, el dipòsit de sediments sobre el territori costa-riqueny i el canvi del curs del riu Colorado, amb la consegüent modificació del límit fronterer entre ambdós països. D'aquesta manera, en la sol·licitud de mesures provisionals, i pel que ens interessa, Costa Rica va

⁵ Fins ara, tenim els pronunciaments del TIJ en l'afer *Projecte Gabčíkov-Nagymaros (Hongria c. Eslovàquia)*, de 25 de setembre de 1997, en l'opinió consultiva del TIJ amb relació a la *Legalitat de l'amenaça o l'ús d'armes nuclears* de 8 de juliol de 1996 i en l'afer sobre les *Fàbriques de paper al riu Uruguai* (Argentina c. Uruguai), de 20 d'abril de 2010.

⁶ Vegeu els comentaris d'aquests dos afers en la crònica publicada en el núm. 2 de la RCDA.

⁷ La Convenció sobre les zones humides, signada a Ramsar (Iran) el 2 de febrer de 1971, i que va entrar en vigor el 21 de desembre de 1975, constitueix el marc per coordinar actuacions nacionals i internacionals en la conservació i en l'ús intel·ligent de zones humides i els seus recursos, especialment, com a hàbitat aquàtic. Vegeu més informació sobre aquest conveni al web: <<http://www.ramsar.org>>.

demanar que, en primer lloc, el Tribunal declarés el cessament immediat de la tala d'arbres i de la retirada de vegetació i terra en les zones humides i boscos que es troben sota la seva sobirania; i en segon lloc, el cessament immediat de l'abocament de sediments al territori costa-riqueny. A més, va demanar que Nicaragua s'abstingués de realitzar qualsevol altra actuació que pogués perjudicar els drets de Costa Rica o que pogués agreujar o estendre la controvèrsia territorial encara pendent davant el Tribunal.

Nicaragua, per la seva banda, va argüir que les activitats de construcció i drenatge es produïen exclusivament en territori nicaragüenc i que en cap moment es van ocasionar danys irreparables per a Costa Rica. Pel que fa al canal, Nicaragua va assenyalar que es tractava d'un canal natural que amb els anys s'havia obstruït i que les seves actuacions es limitaven a fer-lo novament navegable per a petites embarcacions, i va descartar que es tractés de la construcció d'un canal artificial, tal com havia denunciat Costa Rica. Pel que fa a la tala d'arbres, Nicaragua va sostenir que va ser limitada, i que es preveu replantar les àrees afectades situades al banc esquerre del canal. Finalment, aquest país va afirmar que les tropes nicaragüenques eren allà amb l'únic propòsit de protegir els treballadors encarregats de netejar el canal i que en cap moment van abandonar el territori nicaragüenc.

El Tribunal, en examinar el primer dels requisits per atorgar mesures provisionals (el caràcter plausible dels drets la protecció dels quals es pretén —*o fumus boni iuris*— i la seva vinculació a les mesures demanades), va recordar que les pretensions de Costa Rica en el litigi principal eren afirmar, d'una banda, el títol de sobirania sobre l'illa Portillos i el riu Colorado, i de l'altra, el seu dret a protegir el medi ambient en aquestes àrees. Segons el Tribunal, i advertint que amb això no es prejutja el resultat del litigi principal, en el present cas els drets al·legats per Costa Rica són plausibles. A més, el Tribunal va afirmar que hi ha un vincle entre aquests drets i les mesures provisionals que es demanen, ja que aquests drets poden veure's afectats si Nicaragua continua amb les seves activitats de drenatge al riu San Juan, ja que suposa una amenaça per a la navegació sobre el riu Colorado i no poden descartar que es causessin danys al territori costa-riqueny.

Pel que fa als altres dos requisits d'atorgament de mesures provisionals (el perjudici irreparable i la urgència), el Tribunal va recordar que, en el marc de litigi principal, Costa Rica reclama que es restauri l'*statu quo* anterior a les activitats dutes a terme per Nicaragua. La urgència per adoptar les mesures provisionals demanades s'explica,

llavors, perquè, a través de les seves actuacions, Nicaragua alterava la situació fàctica abans que es pronunciés el Tribunal sobre el fons. No obstant això, Nicaragua va argumentar que aquest risc ja no existia, en particular el de caràcter ambiental, ja que les operacions de neteja de la llera del canal ja havien finalitzat i les forces armades nicaragüenques ja no es trobaven a la zona. A més, Nicaragua va assenyalar que el procés de reforestació en aquesta àrea ja havia començat.

Així, doncs, el Tribunal va concloure que Nicaragua s'havia d'abstenir de realitzar una sèrie d'actuacions en tota la zona litigiosa, és a dir, s'havia d'abstenir d'enviar o estacionar tropes militars o altre personal, prosseguir amb la construcció o l'allargament del canal, talar arbres o retirar vegetació o terra, ni dipositar sediments. No obstant això, a la vista de les al·legacions de Nicaragua sobre la finalització d'algunes de les activitats denunciades, només calia dictar mesures provisionals amb relació a l'enviament i l'establiment de tropes o d'altre tipus de personal nicaragüenc.

Pel que fa al drenatge del riu San Juan, el Tribunal va considerar que les proves que havien al·legat les parts no permetien afirmar l'existència d'un risc irreparable per al medi ambient costa-riqueny o per al corrent del riu Colorado, ni existia cap risc imminent que amb això es prejudicessin els drets que Costa Rica demanda en el litigi principal.

No obstant això, en aquest pronunciament, el Tribunal ha mostrat la seva sensibilitat ambiental, ja que ha assenyalat que a la zona objecte de disputa, tant Nicaragua com Costa Rica havien designat dos zones humides d'importància internacional en virtut de la Convenció de Ramsar: "*Humedal Caribe Noreste*" i "*Refugio de Vida Silvestre Río San Juan*". Així, considera que, mentre la resolució sobre el fons estigui pendent, Costa Rica té tot el dret de poder evitar que s'ocasioni un perjudici irreparable en aquesta zona, cosa que implicaria l'enviament de personal civil perquè vetlli per la protecció del medi ambient en aquest territori, inclòs el canal. Costa Rica té, en aquest sentit, l'obligació de consultar amb la Secretaria de la Convenció de Ramsar sobre aquestes actuacions, així com notificar prèviament a Nicaragua i esforçar-se per trobar una solució conjunta als problemes.